



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

INFORME SECRETARIAL

Barranquilla, 12/11/2020

Radicado	08001-33-33-014-2020-00007-00
Medio de control o Acción	Tutela (Incidente de Desacato)
Demandante	Karina Mendoza Cepeda
Demandado	Secretaría de Educación Departamental del Atlántico Fiduprevisora S.A
Juez	Guillermo Osorio Afanador

INFORME
Señor juez, paso a su despacho el expediente de la referencia, manifestándole que la entidad incidentada rindió el informe solicitado.
PASA AL DESPACHO
Para decidir sobre incidente de desacato

CONSTANCIA
Expediente digital, memorial suscrito por la Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico, enviado al correo electrónico del despacho de fecha 3 de noviembre de 2020. Memorial suscrito por la Fiduciaria la Fiduprevisora S.A. de fecha 03 de noviembre de 2020.

ALBERTO LUIS OYAGA LARIOS
SECRETARIO

Ultimo Folio Digitalizado y número de cuaderno	Firma de Revisado



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Barranquilla, doce (12) de noviembre de dos mil veinte (2020).

Radicado	08001-33-33-014-2020-00007-00
Medio de control o Acción	Tutela (Incidente de Desacato)
Demandante	Karina Mendoza Cepeda
Demandado	Secretaría de Educación Departamental del Atlántico Fiduprevisora S.A
Juez	Guillermo Osorio Afanador

CONSIDERACIONES

Procede el Despacho a resolver el incidente de desacato instaurado por la señora Karina Mendoza Cepeda, por el incumplimiento de la sentencia de tutela adiada 31 de enero de 2020 proferida por este Despacho, mediante la cual se amparó el derecho fundamental de petición.

FUNDAMENTO DEL INCIDENTE DE DESACATO

Con escrito radicado 15 de octubre de 2020 la señora Karina Mendoza Cepeda actuando a nombre propio, manifiesta que acude al trámite incidental con el fin de que la Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico y la Fiduprevisora S.A, cumplan lo resuelto en el fallo de tutela radicado **2020-00007-00**, proferido el 31 de enero de 2020 por este Despacho.

Revisado el texto de la sentencia, se observa que lo ordenado, en el fallo fue del siguiente tenor:

“(…)

“3.- ORDÉNASE a la **Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico y a Fiduciaria La Previsora -Fiduprevisora S.A.-**, en su condición de entidad encargada del manejo de los recursos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir de la fecha de notificación de la presente providencia, si aún no lo han hecho, respondan el derecho de petición presentado por la señora Karina Mendoza Cepeda, los días 27 y 29 de marzo de 2.019, respectivamente, informándole una fecha cierta en la cual se dé cumplimiento, dentro del plazo de ley, a la sentencia que ordenó el reconocimiento y pago del reajuste de pensión.

(…)”

- Trámite del incidente de desacato

Con escrito radicado el 15 de octubre de 2020, la accionante, presentó por segunda vez incidente desacato, por el incumplimiento de la sentencia adiada 31 de enero de 2020, proferida por este Despacho, a través del cual se tuteló el derecho fundamental de petición a la señora Karina Mendoza Cepeda.

El 19 de octubre de 2020, se profirió auto que ordenó requerir a la doctora MARIA CATALINA UCRÓS GÓMEZ, Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico, o quien haga sus veces, y al doctor Jaime Abril Morales, Vicepresidente del Fondo de Prestaciones de la Fiduciaria la Fiduprevisora S.A., con el fin que informaran de qué manera dieron cumplimiento a la sentencia de tutela de fecha 31 de enero de 2020, proferido por este Despacho por medio del cual se tuteló el derecho fundamental de petición a la señora Karina Mendoza Cepeda, en caso de no haberlo hecho, conminándole



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

para que procedieran a dar cumplimiento de inmediato a lo ordenado en dicha providencia, e informaran cuál era el conducto regular que se surte al interior de la entidad cuando recepcionan los oficios para la notificación personal de los incidentes de desacato.

La doctora María Catalina Ucrós Gómez, Secretaría de Educación de la Gobernación del Atlántico, dio respuesta al requerimiento mediante oficio de fecha 21 de octubre de 2020, y adujo que le ha dado estricto cumplimiento a la orden judicial proferida por su Despacho dentro de la acción de tutela de la referencia, por cuanto se encuentra plenamente demostrado que han realizado los trámites que les corresponden dentro de las competencias asignadas por el Decreto 2831 de 2005, y a través del oficio 405-2019, remitieron para ESTUDIO Y APROBACIÓN a FIDUPREVISORA S.A. la solicitud de cumplimiento de fallo judicial, consistente en reconocer y pagar a la señora KARINA MENDOZA CEPEDA y ELIZABETH DE LOS ANGELES MERCADO MENDOZA la pensión de sobrevivientes del causante MILTON DARIO MERCADO HERRERA.

Sin embargo, este Despacho omitió la respuesta entregada por el Departamento del Atlántico, en tanto, el memorial no se encontró en el expediente digital al momento de tomar la decisión, el oficio quedó pendiente de incorporarse en el mencionado expediente.

Por su parte la Dirección de Gestión Judicial de la Fiduprevisora S.A., a través de la doctora AIDEE JOHANNA GALINDO ACERO de la Coordinación Tutelas, dio respuesta al requerimiento mediante Radicado No.: 20200582849421 de fecha 22 de octubre de 2020 y adujo que a la FIDUPREVISORA S.A., se remitió por parte de la Secretaría de Educación, el proyecto de Acto Administrativo, por lo que, este se estudió y luego del estudio se surtió APROBACIÓN de la PENSIÓN POST MORTEM con fecha de 10 de marzo de 2020.

Además, sostuvo que la Secretaría de Educación remitió el acto administrativo definitivo el pasado 7 de octubre, por lo anterior, adujo que el caso se encontraba en proceso de estudio con el fin de incluir en nómina la prestación; por lo anterior solicitaron a este despacho el término de 15 días con el fin de realizar el procedimiento administrativo de inclusión en nómina.

Frente a tal circunstancia, este Juzgado mediante auto de fecha 29 de octubre de 2020, requirió nuevamente a la doctora MARIA CATALINA UCROS GÓMEZ, y al doctor **JAIME ABRIL MORALES**, Vicepresidente del Fondo de Prestaciones de la Fiduprevisora S.A. a fin que informaran de qué manera habían dado cumplimiento al fallo de tutela de fecha 31 de enero de 2020 por medio del cual se tuteló el derecho fundamental de petición a la accionante.

En el precitado auto, se abrió formalmente incidente de desacato en contra de la doctora **MARIA CATALINA UCRÓS GÓMEZ**, Secretaria de Educación del Departamento del Atlántico, y en contra del doctor **JAIME ABRIL MORALES**, Vicepresidente del Fondo de Prestaciones de la Fiduprevisora S.A. por el incumplimiento del fallo de tutela de fecha 31 de enero de 2020.

Mediante mensaje remitido al buzón de correo electrónico personal institucional sed@atlantico.gov.co, notificacionesjudiciales@atlantico.gov.co y mailto:notjudicial@fiduprevisora.com.co y entrega de copia en físico a la siguiente dirección calle 72 No. 10-03 pisos 4,5,8,9 Bogotá D.C. el Secretario de esta Agencia Judicial notificó personalmente, la providencia de fecha 29 de octubre de 2020, proferida por este Despacho, por medio de la cual se abrió formalmente incidente de desacato en su contra.

Del requerimiento anterior, la doctora Aidee Johanna Galindo Acero de la Dirección de Gestión Judicial de la Fiduprevisora S.A. y la doctora María Catalina Ucrós Gómez,



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico dieron respuesta en los siguientes términos:

POSICIÓN DE LA ENTIDAD INCIDENTADA

Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico

La doctora María Catalina Ucrós Gómez, Secretaria de Educación del Departamento del Atlántico, emitió respuesta mediante memorial adiado 03 de noviembre de 2020, dirigido al Despacho, por medio del cual informa que una vez notificado el auto de fecha 19/10/2020,—por medio del cual se requirió a las accionadas previo a la apertura formal del incidente de desacato— procedieron a revisar las bases de datos y sistemas de información de la oficina de Prestaciones de la Secretaría de Educación, y se evidenció que fue revisada la HOJA DE REVISIÓN por parte de la FIDUPREVISORA S.A., en la cual imparten su aprobación de la prestación solicitada por la actora, procediendo a expedir la resolución No. 0308 del 28/09/2020 “POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE UNA SUSTITUCIÓN PENSIONAL EN CUMPLIMIENTO DE UNA ORDEN JUDICIAL”, la cual se notificó al apoderado judicial de la señora KARINA MENDOZA CEPEDA, quien renuncia a los términos de ejecutoria el día 21/10 de 2020 razón por la cual se procedió a remitir el acto administrativo debidamente ejecutoriado a la entidad encargada del pago de la prestación y posterior inclusión en nómina de pensionados, en este caso Fiduprevisora S.A.

Además indicó que atendiendo a la solicitud del Despacho, procedió a reiterarle a la accionante y a su apoderado, la respuesta dada a su petición a través de oficio No. 0301 del 20/02/2020, informándole que se procedió a expedir la resolución No. 0308 del 28/09/2020, la cual se remitió a Fiduprevisora para el pago de la prestación y posterior inclusión en nómina de pensionados a favor de KARINA MENDOZA CEPEDA Y ELIZABETH DE LOS ANGELES MERCADO MENDOZA, como beneficiarias de la pensión de sobrevivientes del causante MILTON DARIO MERCADO HERRERA.

Por otro lado, señaló que disienten del Despacho, en el sentido que este Juzgado señaló que la Secretaría de Educación del Departamento guardó silencio respecto del requerimiento que le hizo mediante auto de fecha 19 de octubre de 2020, cuando existe evidencia del envío de la respuesta por correo electrónico el 21 de octubre de 2020.

Fiduciaria La Fiduprevisora S.A.—

Mediante escrito signado por la doctora AIDEE JOHANNA GALINDO, Directora Gestión Judicial (E) de la Dirección Gestión Judicial de la Fiduprevisora S.A., radicado de fecha 05 de noviembre de 2020, solicitó una prórroga especial por el término de 10 días para materializar el estudio de la prestación y adujo que procedió a requerir al área encargada, Dirección de Servicio al Cliente, a fin de proyectar respuesta a petición por la cual se informe estado de la prestación 2019-PENS-721298, comunicando la recepción de la orden de pago a la fiduciaria por parte de la entidad territorial, declarada en resolución 308 del 28 de septiembre de 2020, la cual se encuentra en etapa de auditoría para proceder a incluir en nómina de pensionados.

El 09 de noviembre de 2020, la Fiduprevisora S.A. remitió una nueva respuesta al requerimiento que hiciere este Juzgado, y adujo que en el marco del cumplimiento al fallo de tutela del 31 de enero de 2020 proferido por este Despacho, remitió por medio de mensaje de datos a la dirección electrónica anexando oficio No. 20201073155271 —en el que le comunica la existencia de la resolución por medio de la cual se ordena el pago de



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

la Pensión de sobrevivientes-, por lo que señala que ha realizado las conductas legítimas conforme al marco legal, y que se puede concluir que no existe conducta concreta, activa u omisiva que pueda concluir con la supuesta afectación de los derechos fundamentales del accionante en relación con la FIDUPREVISORA S.A. y concluye solicitando el archivo de la diligencias en favor de la Fiduprevisora S.A. por carencia actual del objeto —Hecho Superado— en el marco de las acciones legítimas desarrolladas.

Para evidenciar lo informado, la Fiduprevisora S.A., arrió al expediente escrito dirigido a la señora Karina Mendoza Cepeda enviado mediante oficio No. 20201073155271 y radicado bajo el número 20191070937611 de fecha 06 de noviembre de 2020, en el cual le informa sobre la Resolución proferida que ordena el pago de la pensión de sobrevivientes.

El artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 establece lo siguiente:

“Art. 52. - Desacato. La persona que incumpliere la orden de un juez proferida con base en el presente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto de hasta seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción.”

En correspondencia con lo antes expuesto, el mismo decreto en su artículo 52, señaló como una herramienta para garantizar el cumplimiento de la sentencia de tutela, y por consiguiente de los derechos fundamentales, que aquél que incumpliere la orden de un juez proferida incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis (6) meses y multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, que será impuesta por el juez que dictó la decisión mediante trámite incidental, y consultada al superior jerárquico quien decidirá sobre la legalidad de la misma.

Sobre la naturaleza de dichos poderes, que se justifican por razones de interés público, la H. Corte Constitucional en sentencia C-218 de 1996 expresó lo siguiente:

“El juez como máxima autoridad responsable del proceso, está en la obligación de garantizar el normal desarrollo del mismo, la realización de todos y cada uno de los derechos de quienes en él actúan y obviamente de la sociedad en general, pues su labor trasciende el interés particular. Para ello el legislador lo dota de una serie de instrumentos que posibilitan su labor, sin los cuales le sería difícil mantener el orden y la disciplina que son esenciales en espacios en los cuales se controvierten derechos y se dirimen situaciones en las que predominan conflictos de intereses.”

Aunque el incidente de desacato es una institución distinta al cumplimiento, a través de éste es posible conjurar las acciones u omisiones que amenazan o quebrantan los derechos fundamentales tutelados, razón por la cual su finalidad más que sancionar al responsable del cumplimiento, es garantizar que se respeten los fallos que amparan estos derechos, sin que ello quiera decir que el incidente de desacato constituya el único mecanismo de cumplimiento de las sentencias de tutela.

Sobre el incumplimiento de los fallos judiciales el alto tribunal Constitucional ha expresado¹:

¹Sentencia T-1686 del 6 de diciembre de 2000



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

“Ha de partirse del supuesto de que el orden jurídico fundado en la Constitución no podría subsistir sin la debida garantía del acatamiento a los fallos que profieren los jueces. Ellos han sido revestidos de autoridad suficiente para resolver los conflictos que surgen en los distintos campos de la vida en sociedad y, por tanto, constituyen elemento fundamental de la operatividad y eficiencia del Estado de Derecho.

En el caso de los derechos fundamentales, de cuya verdadera eficacia ha querido el Constituyente ocuparse en forma reiterada, el desacato a las sentencias judiciales que los reconocen es en sí mismo un hecho flagrantemente violatorio del Ordenamiento fundamental.

Todos los funcionarios estatales, desde el más encumbrado hasta el más humilde, y todas las personas, públicas y privadas, tienen el deber de acatar los fallos judiciales, sin entrar a evaluar si ellos son convenientes u oportunos. Basta saber que han sido proferidos por el juez competente para que a ellos se deba respeto y para que quienes se encuentran vinculados por sus resoluciones contraigan la obligación perentoria e inexcusable de cumplirlos, máxime si están relacionados con el imperio de las garantías constitucionales.

De allí se desprende necesariamente que si la causa actual de la vulneración de un derecho está representada por la resistencia de un funcionario público o de un particular a ejecutar lo dispuesto por un juez de la República, nos encontramos ante una omisión de las que contempla el artículo 86 de la Carta, como objeto de acción encaminada a la defensa efectiva del derecho constitucional conculcado.

(...)

Por tanto, cuando el obligado a acatar un fallo lo desconoce, no sólo viola los derechos que con la providencia han sido protegidos, sino que se interpone en el libre acceso a la administración de justicia, en cuanto la hace imposible, frustrando así uno de los cometidos básicos del orden jurídico, y truncando las posibilidades de llevar a feliz término el proceso tramitado. Por ello es responsable y debe ser sancionado, pero con su responsabilidad y sanción no queda satisfecho el interés subjetivo de quien ha sido víctima de la violación a sus derechos, motivo por el cual el sistema tiene que propiciar, de manera indiscutible, una vía dotada de la suficiente eficacia para asegurar que lo deducido en juicio tenga cabal realización”.

En relación con el desacato, la Corte Constitucional ha indicado:

“El desacato consiste en incumplir cualquier orden proferida por el juez con base en las facultades que se le otorgan dentro del trámite de la acción de tutela y con ocasión de la misma (...) La facultad del juez de imponer la sanción por el incumplimiento de tal orden debe entenderse inmersa dentro del contexto de sus poderes disciplinarios, asimilables a los que le concede al juez civil el numeral 2 del artículo 39 del Código de Procedimiento Civil.

Sobre la naturaleza de dichos poderes, que se justifican por razones de interés público, expresó esta corporación, en el reciente fallo C-218 de 1996 lo siguiente: “El juez como máxima autoridad responsable del proceso, está en la obligación de garantizar el normal desarrollo del mismo, la realización de todos y cada uno de los derechos de quienes en él actúan y obviamente de la sociedad en general, pues su labor trasciende el interés particular. Para ello el legislador lo dota de una serie de instrumentos que posibilitan su labor, sin los cuales le sería difícil mantener el orden



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

y la disciplina que son esenciales en espacios en los cuales se controvierten derechos y se dirimen situaciones en las que predominan conflictos de intereses.²

Para imponer las sanciones previstas para los que incumplen un fallo de tutela, la Corte Constitucional ha distinguido dos elementos de responsabilidad; uno objetivo y otro subjetivo. En sentencia T- 512 de 2011, se dijo:

“CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA E INCIDENTE DE DESACATO-
Responsabilidad objetiva y subjetiva

“Siendo el incidente de desacato un mecanismo de coerción que tienen a su disposición los jueces en desarrollo de sus facultades disciplinarias, el mismo está cobijado por los principios del derecho sancionador, y específicamente por las garantías que éste otorga al disciplinado. Así las cosas, en el trámite del desacato siempre será necesario demostrar la responsabilidad subjetiva en el incumplimiento del fallo de tutela. Así las cosas, el solo incumplimiento del fallo no da lugar a la imposición de la sanción, ya que es necesario que se pruebe la negligencia o el dolo de la persona que debe cumplir la sentencia de tutela.”

De lo anterior se puede afirmar que el elemento objetivo se refiere al incumplimiento del fallo en sí, y el subjetivo hace relación con la persona responsable de dar cumplimiento al fallo.

Caso en concreto.

En el caso bajo estudio, se hace necesario destacar que lo que motivó a la accionante a interponer la acción de tutela de la referencia en contra de la Secretaria de Educación del Departamento del Atlántico y la Fidupervisora S.A., estuvo en la vulneración del derecho fundamental de petición, ante la no respuesta de fondo a las peticiones de fecha 27 y 29 de marzo de 2019, en el sentido de informar una fecha cierta en la cual se diera cumplimiento, dentro del plazo de ley, a la sentencia que ordenó el reconocimiento y pago del reajuste de pensión, esta Agencia Judicial decidió tutelar el mencionado derecho por considerar que dichas entidades se encontraban vulnerándolos.

Es preciso indicar, que el trámite que se surtió dentro del presente incidente de desacato se llevó a cabo dentro del marco de las garantías procesales, teniendo en cuenta como fuera señalado en el recuento procesal, que mediante auto de fecha 29 de octubre de 2020, se dispuso abrir incidente en contra de la doctora **MARIA CATALINA UCROS GÓMEZ**, Secretaria de Educación Departamental y al doctor **JAIME ABRIL MORALES**, Vicepresidente del Fondo de Prestaciones de la Fidupervisora S.A, con la orden respectiva de notificación personal, para que ejercieran su derecho de defensa y contradicción dentro del mismo.

La Secretaría de Educación, como se mencionó respondió al requerimiento mediante memorial de fecha 03 de noviembre de 2020, enviado al buzón del correo electrónico del Despacho, en el que da cuenta que respondió a la petición, aportando al plenario la siguiente documentación:

- Memorial de fecha 21 de octubre de 2020, por medio del cual la doctora María Catalina Ucrós Gómez, Secretaria de Educación Departamental, responde al

²Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C- 243 de 1996.



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

requerimiento que hiciere este Despacho mediante auto de fecha 19 de octubre de 2020.

- Oficio No. 667 de 2020 de fecha 20 de octubre de 2020, por medio del cual se efectúa la notificación el acto administrativo No. 0308 de fecha 28 de septiembre de 2020.
- Resolución No. 0308 de fecha 28 de septiembre de 2020, por medio del cual se reconoce y ordena el pago de una sustitución pensional en cumplimiento de una orden judicial, signada por la doctora María Catalina Ucrós Gómez, Secretaria de Educación del Departamento del Atlántico.
- Memorial de fecha 21 de octubre de 2020, suscrito por la doctora Elsa De la Rosa Berdejo, Asesora Jurídica de la Gobernación del Departamento del Atlántico, mediante el cual se da respuesta al derecho de petición radicado ATL2019ER005629, y en el cual se informa que se remitió el acto administrativo No. 0308 del 28 de septiembre de 2020 para pago e inclusión en nómina.
- Constancia de envío de correo electrónico el día 20 de octubre de 2019, al apoderado de la señora Karina Mendoza y que da cuenta que el apoderado lo recibió y renunció a los términos de ejecutoria el día 21 de octubre de 2020.

La Fiduprevisora S.A., como se mencionó, respondió al requerimiento mediante memoriales, enviados al buzón del correo electrónico del Despacho, el 05 de octubre de 2020, y 09 de noviembre de 2020 en el que da cuenta que respondió a la petición, aportando al plenario la siguiente documentación:

- Memorial de fecha 09 de noviembre de 2020, radicado No. 20200583163461, por medio del cual se remite informe de cumplimiento.
- Oficio No. 20201073155271 de fecha 06 de noviembre de 2020, suscrito por la dirección del servicio al cliente y comunicaciones y dirigido a la señora Karina Mendoza Cepeda, mediante el cual responde a solicitud e informa que la resolución por medio de la cual se ordena el pago de pensión de sobrevivientes fue recibida en la fiduciaria el día 03 de noviembre de 2020, y que se encuentra en proceso de validación por parte del área encargada. Además, informa que en el evento de encontrarse ajustada a derecho se incluirá en nómina de acuerdo a los cronogramas establecidos por la administración del fondo.

Analizadas las pruebas allegadas al expediente del presente trámite incidental, se observa efectivamente, que las entidades incidentadas realizaron las gestiones necesarias para dar cumplimiento al fallo de tutela de fecha 31 de enero de 2020, por parte de la Secretaría de Educación, se expidió el acto administrativo, resolución 0308 de fecha 28 de septiembre de 2020, por medio del cual se reconoce y ordena el pago de una sustitución pensional en cumplimiento de una orden judicial, y se remitió a la Fiduprevisora S.A., el mencionado acto administrativo para se incluyera en nómina y se realizara el pago de la pensión post mortem. Además, se evidenció que la Secretaría de Educación Departamental respondió la petición radicada ATL2019ER005629 suscrita por la accionante, respondiendo de fondo dicha solicitud. Comoquiera que hizo entrega y notificó el acto administrativo que reconoce y ordena el pago a Karina Mendoza Cepeda y Elizabeth De los Ángeles Mercado Mendoza la pensión de sobrevivientes del causante Milton Darío Mercado Herrera.

Asimismo, se evidencia que la Fiduprevisora S.A., le dio a conocer a la accionante mediante oficio 20201073155271 de fecha 06 de noviembre de 2020, que la Secretaría de Educación le había remitido el respectivo acto administrativo y que se iba a incluir en nómina y realizar

Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

el pago, dentro de los plazos establecidos en los cronogramas dispuestos para el efecto, después que el mencionado acto se encontrara ajustado a derecho.

Ahora bien, con el trámite incidental se pretende el cumplimiento del fallo de tutela por parte de quien está obligado a hacerlo. En el asunto sub examine, se advierte que la Secretaría de Educación Departamental y la Fiduciaria la “Fiduprevisora S.A”, dieron cumplimiento al fallo proferido, dándole respuesta de fondo al derecho de petición presentado por la accionante, lo que quedó demostrado en el trámite del presente incidente de desacato, con las pruebas arrojadas al expediente, arriba mencionadas.

Atendiendo lo expuesto anteriormente, el Despacho concluye que, aunque es evidente que las entidades incidentadas cumplieron de manera tardía, no puede el Despacho continuar con el incidente de desacato iniciado, pues carece de fundamento y no procede sanción alguna contra las entidades accionadas e incidentadas, tal como se resolverá.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO. - DAR POR TERMINADO el incidente de desacato iniciado en contra de la doctora MARIA CATALINA UCROS GÓMEZ, Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico, por encontrarse cumplida la orden proferida en el fallo de tutela de fecha 31 de enero de 2020.

SEGUNDO. - NO IMPONER SANCIÓN alguna en contra de la doctora MARIA CATALINA UCROS GÓMEZ, Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico, por las razones expuestas en la parte motiva de éste proveído.

TERCERO. - DAR POR TERMINADO el incidente de desacato iniciado en contra del doctor **JAIME ABRIL MORALES** Vicepresidente del Fondo de Prestaciones de la Fiduciaria S.A., por encontrarse cumplida la orden proferida en el fallo de tutela de fecha 31 de enero de 2020.

CUARTO. - NO IMPONER SANCIÓN alguna en contra del doctor **JAIME ABRIL MORALES** Vicepresidente del Fondo de Prestaciones de la Fiduciaria S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de éste proveído.

QUINTO. - Una vez notificada la presente decisión, archívese el expediente

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GUILLERMO OSORIO AFANADOR
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADO
LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO
ELECTRONICO

Nº 127 DE HOY 13/11/2020 A LAS 8:00 A.M.

ALBERTO LUIS OYAGA LARIOS
SECRETARIO
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE LE DIO CUMPLIMIENTO AL
ARTICULO 201 DEL CPACA



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA